Ana María Salazar

Con la reestructuración de la Secretaría de Gobernación y la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, parecería que el debate sobre cuál debería de ser la estrategia para enfrentar grupos extremadamente violentos está en la congeladora.

Especialmente cuando se analiza que en todos los discursos del Presidente Enrique Peña Nieto la problemática del narcotráfico y crimen organizado parecería haber desaparecido del País, ya que no se menciona.

El discurso en esta administración se ha transformado de un concepto de guerra a una visión de apoyo a las víctimas, promoción de empleo y oportunidades para los jóvenes y programas de prevención. Una política de buscar cambiar las percepciones con la esperanza que este nuevo discurso se transforme en una realidad.

El problema es que no hablar sobre la violencia y el crimen organizado no implica que va a desaparecer el problema. También es muy importante señalar que debido a su capacidad corruptora y la peligrosidad, estas organizaciones serían un reto para cualquier democracia en el mundo. Entre las diferentes críticas que hay sobre la estrategia de guerra que emprendió Felipe Calderón, es que simplemente “alborotó el avispero”. Pero no creo que el actual Gobierno esté proponiendo esperar a que “la casa se llenara de avispas para destruir el panal”.

No critico la estrategia propuesta por la actual administración, al contrario, bien implementada, una estrategia de reestructuración de las instituciones que administran justicia y un importante enfoque en la protección de jóvenes en situación de vulnerabilidad podría cambiar el rumbo del País. Pero el impacto de esta estrategia se sentirá a largo plazo.

¿Cuál es la estrategia a corto plazo? ¿Qué hacer ante la realidad de que hay regiones del País que están bajo el control territorial de algún grupo del crimen organizado? ¿Cómo prevenir más masacres y desapariciones? Y, sobre todo, ¿cómo reducir sustancialmente, en los siguientes seis años, la violencia que ejercen estas organizaciones en contra la sociedad civil?

En el poco tiempo que lleva la Presidencia de Peña Nieto, ya se tiene el soporte legislativo para una importante reestructuración del Estado, que difiere radicalmente a lo que se propuso el sexenio pasado: La estrategia del calderonismo era la creación de una súper secretaría con un enfoque policiaco y una gran capacidad de acumular inteligencia e información, buscaba ejercer control sobre todas las policías del País. Una propuesta que, aunque no tuvo eco en las cámaras legislativas ni en gran parte de las autoridades locales, era una propuesta que tenía una lógica casi imposible de cuestionar: el gran número de policías se traducía en más corrupción y la imposibilidad de coordinar una estrategia efectiva en contra del crimen organizado.

Probablemente no hubo una administración menos coordinada en su estrategia de seguridad que lo que vivió el País en los últimos seis años.

La apuesta de Peña Nieto no sólo es regresar a un esquema que existió hace 12 años, cuando la coordinación de la estrategia de seguridad tenía una visión más política y mucho menos policiaca.

El secretario de Gobernación de nuevo coordinará todos los esfuerzos para controlar las amenazas a la seguridad del País, y no será sólo un espectador, como fueron los secretarios de Gobernación de Calderón. Además, en los siguientes seis años, veremos más actores activamente involucrados en la lucha en contra del crimen organizado.

En los últimos dos años, la propuesta de cambio de estrategia más importante que ha surgido y que se discutió en las campañas presidenciales fue que hay que privilegiar la inteligencia para acabar con la violencia. La estrategia de inteligencia de esta administración todavía no es clara, pero definitivamente podría tener un impacto inmediato en la peligrosidad de las organizaciones criminales.

La actual administración tomó una ruta diferente, podría ser muy efectiva o podría ser un rotundo fracaso sexenal. Mucho dependerá de la capacidad de demostrar resultados en una reducción importante en la violencia que ejercen las organizaciones criminales en contra de los mexicanos a corto plazo. No se puede pedir que los mexicanos esperen generaciones para sentir un cambio en lo que es una demanda fundamental: vivir en paz y seguridad.